

Artículo de investigación E22A20. ❖ Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina.
Recibido: 06.03.2023. ❖ Aceptado versión final: 25.06.2023
JEL: I18. O38. ❖ doi:10.33571/teuken.v14n22a2

COVID-19: políticas públicas y desigualdad social. Desafíos de las nuevas tecnologías durante las campañas de vacunación¹

Laura Marisa Ferreño - María Laura Giménez

ARGENTINA



Doctora en Antropología Social (EIDAES/UNSAM). Posgrado en Gestión Cultural y Comunicación (FLACSO-Argentina) y en Políticas Sociales (EIDAES-UNSAM). Profesora Titular Ordinaria y Coordinadora del Observatorio de Ciudadanía Cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

Contacto: lferreno@undav.edu.ar ORCID: [0000-0003-0165-4084](https://orcid.org/0000-0003-0165-4084)

Doctora en Sociología (UCA). Magister en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA). Profesora Asociada Ordinaria e investigadora del Observatorio de Ciudadanía Cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Especializada en trayectorias productivas y capital cultural de productores periurbanos rurales. Directora de proyectos interinstitucionales con financiamientos nacionales. Integrante de las Comisiones de Acreditación del Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTs) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Contacto: mgimenez@undav.edu.ar

ORCID: [0000-0002-3911-6305](https://orcid.org/0000-0002-3911-6305)

Resumen: los Estados y las ciencias sociales e informáticas se enfrentan a nuevas realidades que cuestionan las estrategias comunicacionales tradicionales con la ciudadanía. La pandemia de covid-19 aceleró este proceso en Argentina. Mediante un análisis de tipo cualitativo en redes, medios y contactos personales, en dos estados subnacionales (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires), se constató que el capital social de cada persona visibilizó la rapidez en el acceso a la inoculación. La amplia difusión de nuevas tecnologías (plataformas en línea y aplicaciones de telefonía móvil) enmascararon las desiguales condiciones de acceso de la población a estas herramientas. Frente a este desafío, las herramientas implementadas durante la campaña de difusión y de vacunación contra el covid-19 profundizaron el problema, en vez de proponerse como una solución.

Palabras Claves: Estado; nuevas tecnologías; campaña vacunación COVID-19; rezagados tecnológicos; inequidad social.

COVID-19: Public policies and social inequality.

¹ Una versión preliminar de algunas de las dimensiones que se abordan en este trabajo fue publicada en Ferreño y Giménez (2021).

Challenges of new technologies during vaccination campaigns

Abstract: States and the social and computer sciences face new realities that question traditional communication strategies with citizens. The COVID-19 pandemic accelerated this process in Argentina. A qualitative analysis of networks, media, and personal contacts in two subnational states (the Autonomous City of Buenos and the Province of Buenos Aires) found that the social capital of each person made visible the speed of access to inoculation. The wide dissemination of new technologies (online platforms and mobile phone applications) masked the unequal conditions of access of the population to these tools. Faced with this challenge, the tools implemented during the dissemination and vaccination campaign against COVID-19 deepened the problem instead of becoming a solution.

Keywords: State; new technologies; COVID-19 vaccination campaign; technological laggards; social inequality

COVID-19: Políticas públicas e desigualdade social. Desafios das novas tecnologias durante as campanhas de vacinação

Resumo: os Estados e as ciências sociais e informáticas defrontam-se com novas realidades que questionam as estratégias tradicionais de comunicação com os cidadãos. A pandemia do COVID-19 acelerou esse processo na Argentina. Através de uma análise qualitativa de redes, meios de comunicação e contatos pessoais, em dois estados subnacionais (a Cidade Autônoma de Buenos e a Província de Buenos Aires), constatou-se que o capital social de cada pessoa tornou visível a velocidade de acesso à inoculação. A ampla difusão das novas tecnologias (plataformas online e aplicações para telemóveis) mascarou as condições desiguais de acesso da população a estas ferramentas. Diante desse desafio, as ferramentas implementadas durante a campanha de divulgação e vacinação contra a COVID-19 aprofundaram o problema, ao invés de propô-lo como solução.

Palavras chaves: Estado; novas tecnologias; Campanha de vacinação contra a COVID-19; retardatários tecnológicos; desigualdade social.

Introducción

La pandemia de covid-19 supuso cambios en los vínculos entre Estado y ciudadanía, debido a la rápida propagación en el año 2020. La virtualización afectó a la sociedad en su conjunto, cuando repentinamente las vidas de las personas se convirtieron a una modalidad en línea, sus hogares se transformaron en ámbitos desde dónde trabajaban, realizaban sus transacciones comerciales habituales e interactuaban con familiares y amistades.

Si bien la virtualidad —como espacio de conectividad laboral, comercial o social— ya estaba presente, en muchos países su uso no era masivo; el aislamiento modificó abruptamente las reglas de convivencia y las formas de las personas para contactarse entre sí (fundamentalmente en las zonas urbanas) y con la burocracia pública, brazo ejecutor en las dependencias gubernamentales. La interrupción de la presencialidad de los trámites tuvo impactos muy desiguales a nivel global y

regional.

En Argentina, eran muy pocos los servicios que se prestaban sin que supusiera la presencialidad en todas o en alguna de las etapas de la gestión. ¿Sus causas había que explorarlas en la falta de recursos tecnológicos por parte del Estado, en una modalidad 'incluyente' de su vinculación con la ciudadanía o en ambas? El cambio repentino de la presencialidad a la modalidad en línea partía de tres supuestos: la posesión masiva de dispositivos (computadoras, tabletas o celulares), el conocimiento tecnológico para utilizar las aplicaciones (apps) y las plataformas virtuales y el acceso a internet rápido.

La complicada tarea de propender a la equidad en un bien escaso y preciado no se planteó como una dimensión a considerar, debido a que estas condiciones, que la realidad evidenció como meras presunciones erróneas, se tomaron como un contexto inherente a toda la ciudadanía, más allá de su situación socioeconómica y del lugar donde viviese, en el diverso territorio nacional argentino.

Este diagnóstico motivó la exploración de los mecanismos implementados en el Plan estratégico para la vacunación contra el covid-19 en la República Argentina, diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación. Aunque no fue obligatoria —a diferencia del Calendario Nacional de Vacunación (Ministerio de Salud, s.f.)—, generó gran expectativa en la población, en un contexto de incertidumbre, miedo y aumento exponencial de contagios y fallecimientos. Para tener una dimensión del contexto local argentino, el Ministerio de Salud informaba que a fecha 31 de julio de 2022 habían fallecido, por covid-19, 129.369 personas y se habían contagiado 9.560.307.

La propuesta de este trabajo es reflexionar, a partir del caso argentino, respecto a las tensiones que enfrenta el Estado en la producción de evidencia que le proporcione una instantánea de la compleja realidad social de cada distrito; información imprescindible para el diseño de herramientas eficaces que tiendan a la inclusión tecnológica de los sectores excluidos.

Las fronteras en las sociedades tecnológicas

Hasta el presente, el desafío respecto al acceso equitativo y la inclusión informática en la vida cotidiana de los sectores más vulnerables, carentes de recursos o capital tecnológico para su acceso, fue soslayado. Las secuelas perviven hasta la actualidad y pareciera que una aspiración hacia la igualdad es cada día más lejana.

Argentina es un país acuciado por las particularidades de la estancación que atraviesa: problemas de déficit fiscal, dependencia histórica de las exportaciones, desequilibrio de la balanza de pagos, dependencia del financiamiento externo, presión impositiva, inflación elevada —a contramarcha del contexto internacional—, depreciación de la moneda agudizada por los diversos tipos de cambios existentes (Palacio, 2020), y aumento de la pobreza² —que se aceleró en

² El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (s.f.) informaba en su página el 29/07/2022 que 27,9% de los hogares se encontraban bajo la línea de pobreza (el 37,3% de la población) en el segundo semestre de 2021.

los últimos años—. En este contexto de recesión económica y vulnerabilidad social, se estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) (Decreto 297, 2020) el 19 de marzo de 2020, en el marco de la pandemia de covid-19.

Durante la primera etapa de su implementación, uno de los mayores retos para el PEN fue la virtualización de todas las actividades (administrativas, educativas y servicios, entre otras). Esta modalidad se incorporó como una habilidad adquirida por toda la ciudadanía, sin un estudio ni análisis de las administraciones públicas nacional y provinciales sobre las diversas realidades del país. Uno de los componentes fundantes de la igualdad de derechos en el siglo XXI, el capital social, se introdujo como una variable ‘dada’ durante este período. Sin embargo, Bourdieu (2014) lo describe como el

conjunto de recursos actuales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento; o, en otros términos, a la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no sólo están dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros o por ellos mismos), sino que también están unidos por vínculos permanente y útiles. (p. 221)

Una consecuencia de haber supuesto que toda la ciudadanía poseía capital social fue que quienes carecían de estos soportes económicos y socioculturales quedaron marginados de la virtualización pandémica. A estos inconvenientes, se les sumó la limitada o nula señal de internet que brindan las empresas privadas proveedoras del servicio, al alejarse de los centros urbanos, problema que verificamos con menor o mayor intensidad en áreas rurales y periurbanas. Allí donde la cantidad de clientes se reduce, internet se vuelve un bien escaso y por momentos inaccesible, sin importar la condición social de quienes habiten en la zona.

La invisibilización de este problema y, en consecuencia, su naturalización emerge desde las diversas variables que se analice. Los niveles gubernamentales nacional y subnacional impusieron una visión de la ciencia informática que partió del supuesto de que el empleo masivo del teléfono celular era una herramienta para la comunicación inclusiva. El empleo de nuevos instrumentos, fundamentalmente de aplicaciones (apps) diseñadas para ejecutarse en los teléfonos móviles inteligentes de última generación, usualmente costosos, cuyo uso se sustenta en saberes preliminares de las opciones que ofrece, suponía un punto de inflexión. La propuesta permitía la localización de las personas, mediante instrumentos georreferenciadores que potenciaban la información obtenida, en el supuesto alcance de estas nuevas herramientas por parte de toda la ciudadanía y su control.

Sin embargo, para algunos sectores de la ciudadanía, estos nuevos canales de comunicación fueron difíciles de utilizar. La virtualidad implicó, además, el empleo cotidiano de opciones que suplieron la presencialidad: desde consultas médicas hasta turnos para múltiples acciones (en salud: vacunación y atención sanitaria, entre otras) y una variedad de trámites, que repentinamente se realizaron de

manera parcial o íntegramente virtual (como legalizaciones de documentos públicos o trámites burocráticos o bancarios).

Parte de estos nuevos dispositivos se han incorporado definitivamente a las rutinas de comunicación entre Estado y ciudadanía, luego del levantamiento paulatino del aislamiento de la población. Pero, ¿todas las personas tenían la posibilidad y el conocimiento previo como para emplear masivamente los diversos instrumentos disponibles y a menudo obligatorios de los entes gubernamentales?³. La centralidad de este supuesto en las administraciones públicas argentinas resulta llamativo. Quizá, este fuera plausible en países donde la equidad es un atributo extendido, pero, en América Latina y en Argentina, en particular, donde un porcentaje importante de su población requiere de los subsidios del Estado para su supervivencia (asunto profusamente discutido en los medios de comunicación) (SIEMPRO, s.f.), implica una apuesta difícil para quienes proyectan este tipo de aplicaciones de acceso masivo. Las autoridades y el funcionariado estatal deben tener como meta el acceso universal de los canales digitales de comunicación, evitando la naturalización de las ‘modas’ tecnológicas.

Al soslayarse la relación de ajenidad que esos grupos establecen con los nuevos soportes tecnológicos, se enmascaró la necesidad de diseñar una política de acercamiento, para incluirlos en una sociedad cada vez más centrada en las redes sociales. Aunque el origen es múltiple, dos son sus causas más relevantes: la primera se refiere al sentimiento de otredad respecto a los nuevos aparatos ‘inteligentes’ (computadoras de escritorio, notebooks, tabletas, celulares) que evidencian la distancia económica y cultural a partir de la cual estas personas construyen sus vínculos con las nuevas tecnologías; la segunda se origina en la carencia de conocimientos, habilidades e intereses previos para utilizar ampliamente las opciones que estos brindan.

Esa alteridad ya no sólo señala la carencia de capital social, sino también la profundización de vínculos y relaciones interpersonales desiguales y dependientes. Muchas comunidades argentinas desperdigadas por zonas periurbanas o relegadas a zonas marginales en las grandes urbes (áreas metropolitanas de los grandes aglomerados como Buenos Aires —AMBA—, Rosario, Córdoba y Mendoza, quizás resulten los casos más paradigmáticos, pero no los únicos) se sienten interpeladas por ese ‘otro tecnológico’. En la misma situación se encuentran los adultos mayores y los ‘rezagados tecnológicos’, personas que, aun teniendo el conocimiento requerido para el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas, cuentan con telefonía móvil ‘vieja’ o ‘nueva’, pero con aparatos económicos y con exiguas prestaciones que adolecen de las mismas trabas. La familiaridad con internet para estos grupos se refiere al acceso a portales de noticias, buscadores (principalmente Google) o redes sociales (como Facebook, Instagram, WhatsApp o Telegram); y, aunque su empleo es muy diverso en función del grupo etario y la clase social, los desafíos de la nueva realidad

³ Si bien las consultas en línea también fueron y son empleadas por el sector privado para consultas u obtención de turnos de distinto tipo, fundamentalmente las médicas y bancarias, el texto se centra en los mecanismos gubernamentales, en tanto es el Estado quien debe ofrecer a la ciudadanía herramientas de uso universal, de modo que cualquier persona puede resolver sus trámites individualmente sin depender de otra para tal fin.

virtual exceden ampliamente estos usos más extendidos.

Entre las tensiones que surgieron en el año 2020 con estos marcos teóricos informáticos diseñados para otras realidades, destaca una determinada por el contexto: la distancia emocional y cultural entre las personas y un mundo pandémico centrado en la virtualidad. En tal sentido, el aislamiento preventivo visibilizó las diferencias e inequidades sociales más crudamente y las exacerbó muy rápidamente. ¿Cómo incluir en la virtualidad a quienes las nuevas tecnologías excluían? En Argentina, la población en situación de vulnerabilidad, por citar un caso, aun en el presente, accede a las plataformas tecnológicas a través de referentes territoriales o redes interpersonales, porque los formularios en línea les resultan ‘ajenos’. Durante el aislamiento impuesto en el 2020, estos referentes territoriales, en tanto referente culturales, se convirtieron en nexo entre el Estado y estos grupos.

Ante un contexto con tantas aristas, ¿qué herramientas eran más idóneas para que la ciudadanía accediese a la aplicación de la vacuna contra el covid-19? Para explorar sus posibles respuestas, resulta pertinente el análisis de los instrumentos implementados para la ejecución de la vacunación masiva de la población contra el covid-19, en el año 2021. En el estudio del caso, se seleccionaron dos estados subnacionales de signo político distinto y colindantes, que conjuntamente conforman el aglomerado poblacional más numeroso del país: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), gobernada por el PRO (partido de derecha opositor al gobierno nacional), y la Provincia de Buenos Aires. El AMBA está integrada por CABA y el anillo de 40 de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires que la circundan. Según datos aportados por el Censo de 2010, sus 14.800.000 habitantes representaban el 37% de los habitantes de la República Argentina. (¿Qué es AMBA?, s.f.)

Contornos del problema

Michel Foucault caracterizó la biopolítica a finales de los años 70, como el conjunto de formas de racionalización impuestas para encarar los problemas que la población planteaba a los gobiernos, entre estas, las políticas de vacunación, “salud, higiene, natalidad, longevidad, razas...”. En Argentina, si bien la biopolítica fue exitosa durante el otoño e invierno de 2020, el largo aislamiento impuesto por el PEN —debido a la pandemia de covid-19— y los anuncios respecto a llegadas incumplidas de vacunas impactaron el humor de la ciudadanía, no sólo por la profundización de la crisis económica, sino por las consecuencias en las dinámicas familiares. Por ejemplo, las clases presenciales en las escuelas de nivel primario y secundario volvieron de manera muy dispar y gradual, a lo largo del año 2021 en las diversas provincias argentinas. Sólo CABA inició el curso lectivo 2021 con clases diarias en ambos niveles y las universidades reiniciaron la presencialidad parcialmente en el año 2022.

Interpelaciones referidas al recorte de las libertades individuales y las medidas de control estatales, tales como el cierre de fronteras o coerciones positivas vinculadas con la vacunación (como los certificados que permitían el ingreso a espacios cerrados), subyacen en la infracción de normas sanitarias

elementales como el uso de barbijo o mascarillas.

Cuando las primeras dosis de Sputnik V llegaron al país desde Rusia los últimos días de diciembre de 2020, la población dudaba de su eficacia, debido a que la vacuna no había sido aún aprobada por las OMS ni avalada por pares evaluadores.—En los primeros días de febrero de 2021, cuando los portales de noticias internacionales (Ansedo, 2021, Schraer, 2021) y nacionales informaron la publicación en la revista *The Lancet* (2021), la ciudadanía comenzó a confiar en su eficacia. Sin embargo, en los dos meses siguientes, hubo impactos negativos en la imagen del presidente y su gabinete, debido a la escasez de vacunas por las demoras en el envío de las dosis compradas (así como la falta de la segunda dosis, cuyo componente era distinto al primero)⁴ y a la distribución desigual entre las provincias, al tomarse como criterio la población total, en vez de personal esencial y adultos mayores⁵ con una mayor concentración en CABA que en el resto del país.

Para revertirla, el gobierno nacional inició una campaña de difusión, en la que las autoridades eran fotografiadas en el momento de su inoculación (El presidente y el ministro, 2021). La estrategia fue criticada en un país donde el Calendario Nacional de Vacunación es gratuito y obligatorio —a diferencia de otros países (como España), en los que la decisión de vacunar a sus hijos es potestad de los padres— y, en consecuencia, los antivacunas son grupos muy reducidos y sin presencia en los medios. La tensión social aumentó cuando se hizo de conocimiento público que, con diversas excusas, las autoridades de la nación —incluso aquellas muy jóvenes— fueron inoculadas antes que el personal médico y personas de riesgo. Aun así, la campaña fue exitosa; en muchos centros de vacunación había una maqueta con la que las personas inoculadas se sacaban una foto con su certificado, para compartir la imagen en redes sociales.

En la Provincia de Buenos Aires, se realizaron campañas de difusión mediante mesas informativas en la vía pública y el ‘timbreo’ casa por casa, durante el verano de 2021 (enero y febrero). A pesar de no contar con las dosis para iniciar la campaña, se proponía a las personas inscribirse provisionalmente sin importar situación de riesgo, trabajo o edad. Posteriormente, el mecanismo adoptado fue la descarga de la aplicación *VacunatePBA*, y finalmente un sitio web como opción. La población de CABA —colindante con la provincia de Buenos Aires— debió esperar a cumplir con los requisitos y el esquema determinado por el PEN, para el empadronamiento en línea (*Vacunación Covid-19*, s.f.), situación que generaba tanta ansiedad que, cuando el 19 de febrero de 2021 a las 14 h abrieron la inscripción para mayores de 80 años, el sistema colapsó. (*Vacunas contra el*

⁴ El micrositio de Sputnik (s.f.) informaba que la diferencia de los componentes pretendía “asegurar una inmunidad duradera, científicos rusos han desarrollado la idea novedosa de usar dos tipos diferentes de vectores adenovirales (rAd26 y rAd5) para la primera y segunda dosis de la vacuna, reforzando así su efecto inmunizador”.

⁵ En Argentina, el PEN determinó que primero se inoculase el personal sanitario de servicios públicos, luego los de centros privados y al personal esencial (policías, fuerzas armadas, etc.), adultos mayores y personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas. Paulatinamente, fueron agregándose a la nómina de empleos esenciales a maestros (que se negaron a dictar clases presenciales si no eran vacunados), profesores de nivel secundario y otros sectores con capacidad de presión sindical.

coronavirus, 2021)

En este contexto tan crispado, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, cuando los medios difundieron favoritismo en la vacunación por contactos políticos, los 'colados VIP' (Argentina difunde lista, 2021; Nuevas intrigas del vacunatorio VIP, 2021; Struminger, 2021), con lo que se incumplía lo dispuesto por el PEN en el Plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina (2020) respecto al orden de prioridades (personal médico y esencial, adultos mayores, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas, todas ellas expuestas al coronavirus del SARS-COV-2 con distintos grados de riesgo de vida).

La situación tuvo amplia repercusión porque se dio en un marco de sospechas sobre la preferencia del ministro saliente para que el laboratorio mAbxience realizara en el país la producción del componente de la vacuna de AstraZeneca (el fraccionamiento iba a realizarse en Méjico), con el relegamiento de la vacuna de Pfizer, ya que, al haber realizado el ensayo clínico en el Hospital Militar Central de Buenos Aires (Los detalles del ensayo clínico, 2020), la población esperaba una pronta recepción de estas vacunas; sin embargo, la compra se había suspendido y las explicaciones oficiales fueron muy confusas y contradictorias respecto a las brindadas por el laboratorio. (González, 2021)

La imagen presidencial cayó abruptamente y, paralelamente, la población empezó a sospechar de los instrumentos propuestos para inscribirse para la vacunación, que variaron de una provincia a otra. El asunto era delicado, los contagios comenzaron a aumentar y, consecuentemente, las muertes también.

En otros países, el procedimiento se sorteó más equitativamente. En España, aunque la vacunación no fuera obligatoria, se incentivó la inoculación, en la población. En Galicia, por ejemplo, la presentación del pase sanitario para el acceso a lugares cerrados fue una medida eficaz, en tanto indujo a que la juventud se vacunase, de no tenerlo, debía contarse con test de antígenos o certificado de recuperación posterior a covid-19. Algunas comunidades españolas implementaron un sistema de asignación de turnos mediante envío de SMS a los teléfonos móviles para la vacunación sin registro previo. Así, en la citada Galicia y en la Comunidad Valenciana, por mencionar dos casos, las personas recibían mediante mensaje de texto (Galicia citará a los mayores, 2021) información sobre el lugar, el día y la hora asignados (que no podía elegirse, a diferencia de CABA, en Argentina, tampoco la vacuna a aplicarse).

Esta opción simplificó a la población el acceso a la vacunación, especialmente a quienes dependían de terceros para el empadronamiento y la recepción de la cita, ya que esta no requería confirmación (a diferencia de Argentina, donde además se enviaba por WhatsApp o correo electrónico). En caso de no concurrir, recibían un SMS con otra cita. Asimismo, cuando se procedía a convocar al siguiente grupo etario de personas a vacunarse, se efectuaba la "repeca" de quienes aún no se habían inoculado, asignándoles un nuevo turno. Transcurridos los meses y ya con un porcentaje alto de la población inoculada, tanto en Argentina como en España el sistema se flexibilizó y se posibilitó la solicitud de turnos en espacios y días específicos, pero sin opción de elegir vacuna.

Quetglas (2021a) planteó que en Argentina la pandemia expuso tres elementos a considerar respecto al abordaje del problema: un modelo de gestión estatal opaco e ineficiente contrapuesto a la percepción ciudadana de que 'el Estado es el que te salva', con lo que se minimizó el esfuerzo del personal sanitario y esencial; la desconfianza hacia 'la política' y las burocracias públicas, tanto por sospechas de ineficiencia o corrupción, como por un largo proceso de desprofesionalización; y la brecha que emergió entre las formas de gestión gubernamental y los 'nativos digitales'.

La tensión entre ciudadanía e inteligencia artificial (IA) se incrementó debido a las demandas de los actores sociales que pugnaban desde lugares muy disímiles de la sociedad: por un lado, quienes están hiperconectados, con acceso a canales muy diversos de información, frente a un Estado que, al pretender controlar esta última, estimulaba el conflicto; y, por otro, quienes lidiaban por acceder a la conectividad, aunque solo fuera para disponer de un canal de vínculo para el acceso a la ayuda estatal.

Este conflicto evidenció la obsolescencia de las herramientas que se emplean desde el Estado para abordar el problema. Un porcentaje cada vez mayor de la ciudadanía no puede acceder a las nuevas tecnologías, lo que resultaba evidente, como destacó Quetglas (2021a), con las revelaciones derivadas de la pandemia: el impacto de las transformaciones sociotecnológicas en la sociedad no tuvo correlato ni en el diseño ni en las formas de gestionar las políticas públicas, lo que visibilizó que las formas de ejercicio de representación y comunicación con la ciudadanía que fueron hegemónicas durante el siglo XX ya eran obsoletos. La solución debe ser creativa y adaptarse a las diversas realidades territoriales y las necesidades específicas de cada grupo: jóvenes, adultos, personas mayores, con o sin experiencia laboral, nivel educativo, formación profesional, género. (Quetglas, 2021b)

El incremento del déficit de integración en barrios vulnerables, la deserción escolar, los problemas de socialización de las familias, el bajo empleo de la juventud o sus pocas posibilidades de conseguir trabajo, y la inestable incorporación al mercado laboral, eran todos problemas preexistentes a la pandemia de covid-19, que esta agravó. El corolario de este proceso de exclusión es la desafiliación (Castel, 1997) de quienes viven en los intersticios sin encontrar un 'lugar' en la estructura social, habitan los márgenes laborales y territoriales de la sociedad. Debido a que instituciones como las escuelas se vuelven marginales para estos grupos, se acelera su disociación del resto de la sociedad, expresada de múltiples modos, entre estos, la distancia cultural y el extrañamiento que perciben respecto a los ámbitos cotidianos de los grupos integrados, por ejemplo, los espacios de recreación de las grandes ciudades. (Merklen, 2000)

Si el acceso a los bienes culturales es un mecanismo de clasificación social y si la divulgación de sitios de internet con fines informativos o de capacitación ordenan pertenencias e intereses de grupo, ¿cómo digitalizar a estos sectores excluidos? El despojamiento de estos bienes que facilitan la inserción social de las personas conlleva una reducción de su capital social. Los recursos efectivos o potenciales, vinculados con relaciones interpersonales que confieren utilidad y una *pertenencia a un grupo* sostenida temporalmente, son los que determinan el

volumen del capital social de una persona, que depende de su capital económico, cultural y simbólico (Bourdieu, 2014). Los recursos individuales visibilizan el grado de capital delegado (a medida que decrecen los recursos con los que una persona cuenta, mayor es el grado de delegación) en un individuo del grupo, que es quien concentra y se transforma en mediador hacia afuera, tanto de cuestiones vitales como de aquellas menos relevantes, por caso: completar un formulario en internet para solicitar la aplicación de la vacuna contra el covid-19 o ayuda social.

Las capacidades socioculturales de cada individuo varían en función del volumen de su capital social. Por lo tanto, es necesario reflexionar respecto a los mecanismos más idóneos para incluir —y, en tal sentido, ‘reciudadanizar’— a quienes carecen de suficiente capital social como para afrontar los retos de la virtualidad, para que las instituciones formales constituyan algo más que un lugar de paso —en tanto ámbito burocratizado donde se tramitan los subsidios estatales— y se transformen en lugares de estar, esto es, espacios de pertenencia y no de ajenidad.

En Argentina, la reconfiguración de los vínculos entre Estado y ciudadanía expuso el agotamiento de las formas de concebir y de ‘hacer’ política, al revelar la disociación de las dirigencias partidarias y gubernamentales de las personas, situación que se replicó en territorios muy disímiles entre sí e involucró a todas las clases sociales. La virtualización de los procesos burocráticos gubernamentales agravó en muchos casos la distancia entre estos y la población. A la pauperización o marginación del capital humano, se le sumó la carencia de las credenciales necesarias y el conocimiento de dimensiones culturales imprescindibles para la vida inmersa en estas nuevas herramientas de la IA.

La alfabetización tecnológica (Rivas, 2022) es una estrategia de política pública imprescindible para fortalecer las democracias del siglo XXI. La ausencia de estos debates en la actualidad se debe, en parte, al incremento de personas analfabetas funcionales. Para un Estado con estructuras obsoletas, estos desafíos se vuelven muy complejos de afrontar. Como paradójicamente destacara Castel (1997), en un texto que tiene más de dos décadas, la crisis no sólo es de legitimidad, sino también de operatividad en el funcionamiento de las burocracias públicas.

¿Cuáles serían los mecanismos más idóneos para revertir este proceso de expulsión ciudadana, que en Argentina se inicia a mediados de la década de 1970? En principio, es necesario el reconocimiento de que la desafiliación social es un riesgo latente cuando las relaciones de proximidad de una persona —sustentadas en sus inscripciones territoriales, tales como sus redes de parentesco e instrumentales— tienen “una falla que le impide reproducir su existencia y asegurar su protección” (Castel, 1997, p. 31). A ello se le suma, la pérdida de estructuras dadoras de sentido, como las interacciones insertas en proyectos de grupo que profundizan los caminos expulsivos de la ajenidad infranqueable, en una sociedad hiperconectada. ¿Qué propuesta para disminuir esta brecha impulsó el Estado?

Estados y pandemia: marchas y contramarchas en la búsqueda de respuestas

La irrupción de la pandemia también evidenció la escasa coordinación entre los niveles de gobierno, así como las falencias de los centros de información de crisis, la demora en los procesamientos de datos que deberían realizarse en tiempo real (Rivas, 2021) y la falta de coordinación de políticas sanitarias entre países, acción que hubiera potenciado los resultados. La capacidad de respuesta ante el covid-19 evidenció la distancia que separa a los países desarrollados de los emergentes, brecha que se incrementa debido al crecimiento vertiginoso de las nuevas tecnologías y, a la vez, a las escasas posibilidades (originadas en déficits estructurales que los países más pobres arrastran en su mayoría) para incorporar estos nuevos desarrollos con la celeridad requerida (Oszlak, 2020b).

Oszlak (2020a; 2020b) denominó 'era exponencial' a la rapidez con la que se produce la aceleración de los cambios tecnológicos; celeridad que precipita el proceso frente a esta nueva ajenidad. Una inclusión fallida que convierte en 'otros' a quienes son rezagados digitales. Los estados deben proteger a la población más vulnerable también de estas 'nuevas' inequidades y evitar que se profundice la desigualdad social ante la irrupción de las plataformas informáticas. Asimismo, debe protegerse y proteger a la ciudadanía de la dependencia tecnológica que ambos tienen frente las grandes potencias y las empresas multinacionales que controlan la innovación científica. (Oszlak, 2020a)

La naturalización de estas innovaciones y sus efectos en la organización de las rutinas cotidianas sustancian un cambio respecto a las formas en que mapeamos y procesamos las coordenadas de la vida diaria. Este 'giro cultural' interpela "al modo en que pensamos sobre el modo en que pensamos" (Geertz, 2008, p. 64); en tanto, todas las transformaciones del presente y futuras (*big data*, robótica, IA, entre otras) interrogan a quienes tienen conciencia de que muchas de sus decisiones las realizan máquinas que predicen e inducen sus comportamientos y acciones.

Los poderes estatales, las instituciones que los encarnan, las asociaciones civiles y la ciudadanía deben preguntarse qué tan dispuestos están a tolerar una sociedad que tiende cada vez más a la exclusión en los países emergentes y pobres; deben necesariamente anticiparse y empezar a diseñar estrategias que las reviertan y den respuestas eficaces. La sola posibilidad de que los diferentes ámbitos gubernamentales se planteen estas preguntas también supone un giro cultural de sus dependencias y funcionarios públicos, en tanto, deben replantearse las formas de construir el conocimiento y de diseñar las políticas públicas.

Si, como plantea Oszlak (2020a), parece inexorable que los servicios gubernamentales se sustenten en plataformas, ¿cómo interactuarán con estas quienes tienen problemas de acceso a ese tipo de servicios o a internet, ya sea por ajenidad con las nuevas tecnologías, por deficiencias en las señales o por carecer de los soportes físicos a través de los cuales se accede a estas plataformas? ¿La IA podrá modificar los roles y vínculos entre los gobiernos y la ciudadanía en su conjunto, o quedará circunscrito a ciertas clases sociales? El autor cree que sí porque plantea que estos instrumentos de gestión transformarán profundamente

en el futuro las pautas tanto de organización como de interacción de la vida social, respecto a “nuestro hábitat, costumbres y modalidades de recreación, la manera de informarnos, comunicarnos, transportarnos, alimentarnos o atender nuestra salud”. (Oszlak, 2020a, p. 105)

Entre las posibles consecuencias positivas, Oszlak vislumbra opciones más sostenibles con los grupos vulnerables: una administración estatal sustentada en las redes y gobiernos más vinculados con la población para estimular la participación ciudadana en la gestión y el diseño de las políticas públicas. No queda claro, sin embargo, cómo se realizará la interacción con la ciudadanía que habita en las zonas más alejadas de los centros urbanos y de difícil acceso, para brindar soluciones rápidas y factibles a partir de los aportes de la inteligencia de datos y alcanzar un ‘Buen Vivir’ (Oszlak, 2020a). En Argentina, las empresas de telefonía móvil ofrecen aparatos económicos desde el equivalente aproximado de un salario mínimo; sin embargo, ¿su adquisición reduce la brecha digital para los sectores más pobres? ¿Esos celulares permiten acceder a plataformas y realizar los trámites en línea del presente? Las limitaciones de estas herramientas para resolver los problemas de inequidad, el sesgo ideológico y la discriminación deben incorporarse a las agendas gubernamentales.

Si bien las nuevas tecnologías eliminan las discrecionalidades de la burocracia pública y de referentes políticos (aunque pervive con canales alternativos para los mencionados ‘colados vip’), esta posibilidad desaparece para la ciudadanía sin contactos políticos, más pobre y/o carente de redes. Estos actores, en muchos casos, son los únicos mediadores entre los poderes estatales y la ciudadanía; sin intermediación, la reconfiguración de estos vínculos con los sectores más vulnerables es difuso.

Tácitamente se ha reformulado el contrato social, en el que intervinieron principalmente dos actores: una amplia variedad de sectores vinculados con las nuevas tecnologías y los Estado-Nación —cuya capacidad de intervención como dique de contención es muy diverso, debido en parte a que también se beneficia de la información obtenida mediante estos nuevos dispositivos disponibles, aunque desconocemos en qué medida cruzan los datos—. Ambos ‘lograron acuerdos’ mediante nuevas normativas o a través de usos y costumbres recientes. La ciudadanía, en cambio, fue y es hasta el momento un mero espectador de estos nuevos dispositivos creados para su vigilancia y control; y, si bien ello supuso la posibilidad de nuevas opciones de conexión para la población de zonas rurales pobres y alejadas de las ciudades, muchas personas aún no han podido acceder a estas oportunidades.

Se mantiene el desafío sobre ¿cómo generalizar y ampliar la utilización ciudadana de la web y la digitalización de los servicios públicos, al ampliar el papel de los gobiernos como plataformas para brindar mayores servicios personalizados? (Oszlak, 2020^a, p. 246). Esta es la pregunta que interpela los posibles escenarios metodológicos e informáticos en la búsqueda de respuestas.

La urgencia de generar conocimiento cuestionó los modos de acercamiento al objeto de estudio, y hubo que recurrir a tecnologías impensadas, como las plataformas Meet (de Google), Teams (Microsoft) y Zoom, el correo electrónico o

grabaciones telefónicas que se incorporaron como herramientas en el trabajo de campo para la observación y las encuestas. Las redes sociales sirven de vehículo para el relevamiento de datos de investigaciones, a la vez que confluyen en un espacio intangible de información privada y pública.

El Estado, mediante plataformas digitales, transparentó información sociodemográfica que se nutrió de estas nuevas herramientas. Encuestas sencillas, con preguntas concisas y claras para ser interpretadas fácilmente por los encuestados, pueden ser respondidas desde celulares o computadoras, definiendo allí un criterio de selección de las unidades muestrales. Sin embargo, ¿toda la ciudadanía puede completar estos formularios?, ¿el capital social se puede incorporar como variable en un muestreo no probabilístico? Fontdevila (2022) respondió con humor a estas preguntas.

Gráfico 1. Atención al público



Fuente: tomado de Fontdevila (2022)

Sin embargo, quienes diseñan las estrategias gubernamentales para revertir la exclusión de los rezagados tecnológicos parecieran contar con menos recursos para percibir la existencia del problema que el humorista de esta viñeta.

Las plataformas digitales en los protocolos de vacunación contra el covid-19

La aceleración en la digitalización de los procesos burocráticos en la gestión pública del ámbito de salud movilizó transformaciones, en la organización social y en la vinculación de los actores, entre ellos mismos y entre las esferas públicas y privadas. Las plataformas en línea, cuyo fin era la optimización de los procedimientos en contextos de aislamiento y distanciamiento social, tuvieron un efecto contrario: la marginación de sectores vulnerables, adultos mayores y rezagados tecnológicos.

¿Cómo se producen estas desigualdades? Hay dos limitantes: la primera es el conocimiento de la población sobre el funcionamiento de estas plataformas para diligenciar los formularios y concluir el trámite satisfactoriamente. La impericia

cercena la acción de los actores sociales, los paraliza, sólo el 'boca a boca' entre los pares actúa como superador. 'Conocer' la plataforma señala una diferencia entre los actores. Sin embargo, la asimetría entre pares continúa. El éxito se vincula con el capital social de cada actor. Aunque tuviera contacto con recursos digitales, su empleo resulta complejo para quienes cuentan con escasos conocimientos informáticos.

La segunda limitante genera una búsqueda constante de soluciones, cuya ausencia tiene un impacto negativo sobre las subjetividades, al dar forma a un 'hastío' (Simmel, 2005) y a la decepción en los actores que buscan respuestas por los canales a los cuales puedan acceder. Cuando el capital social es exiguo, este es delegado; si la relación derivada de la presencia en espacios y dependencias públicas es un recurso lejano, cuando este vínculo se virtualiza se vuelve inaccesible.

¿Cómo se soluciona esta falencia para la gestión del plan de vacunación covid-19? En el caso de los adultos mayores, la estrategia dependió del distrito donde se residía. En CABA, personas con vínculos de parentesco o amistad completaron el formulario, solicitaron la cita y recibieron la confirmación del turno vía WhatsApp y correo electrónico. En Provincia de Buenos Aires, quien realizaba el empadronamiento en línea descargaba una aplicación en el celular a la espera de la comunicación del turno asignado. Este sistema resultó engorroso porque la aplicación sólo permitía la vinculación con los datos de una persona; si en la familia había más de una persona mayor o con incapacidad, el seguimiento de varias a la vez se hacía más complicado.

Reflexiones finales

La perspectiva sanitarista durante la pandemia de covid-19 soslayó otras dimensiones. ¿Cómo pensar la 'cuestión social' para evitar los contagios de una enfermedad, si los Estados preventivamente confinan a la población al aislamiento o la cuarentena, medida supuestamente 'probada' en sucesivas epidemias a lo largo de la historia? La respuesta del gobierno argentino a este interrogante fue el estudio de variables como circulación, distancia y transporte en las grandes aglomeraciones, abordadas como competencias de las ciencias sociales y humanas, importantes para el durante y para el después de la pandemia.

Las acciones implementadas durante la primera fase de propagación de la pandemia de covid-19, desde la perspectiva sanitarista clásica (control del virus mediante disciplinamiento social a través de la vigilancia), se complementaron con la visión de la ciencia informática que ofrecía nuevas y sofisticadas tecnologías para intentar frenar sus efectos.

El supuesto de que las aplicaciones para telefonía móvil constituían una herramienta de comunicación inclusiva a la vez que cumplían la función de controlador social tuvo dificultades para alcanzar tales presunciones. En Argentina, no toda la ciudadanía tiene recursos como para mantener el servicio de internet en su línea telefónica de manera permanente; quienes lo tienen no quisieron arriesgar su movilidad ni arriesgarse a ser sancionados como infractores durante el aislamiento y el distanciamiento social, sortearon los mecanismos de

control (como la aplicación Cuidar del PEN, que actualmente ya no se encuentra disponible) mediante la solicitud en línea para autorizar traslados y la recepción vía correo electrónico. Esta era una opción para la población que percibía coartada sus libertades, pero no para los rezagados tecnológicos.

Estos indicios interpelan los resultados alcanzados por plataformas que fueron empleadas masivamente por las distintas clases sociales dispersas en distritos urbanos, periurbanos y rurales de todo el país; en tal sentido, pueden considerarse 'exitosas'. Sin embargo, la realidad pareciera contradecir la narrativa oficial. La efectividad de 'Buenos Aires Vacunate' (Plan provincial público, s.f.) y la aplicación voluntaria de empadronamiento de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la vacunación contra el covid-19 tuvieron una inserción fragmentaria en la sociedad.

A pesar de la amplia campaña de difusión que el gobierno provincial desarrolló, gradualmente fue habilitando la demanda espontánea sin turno previo para acceder a la primera dosis y se ampliaron los lugares de vacunación, mediante la habilitación de postas en la vía pública sin registro ni turno previo (Emergencia sanitaria, s.f.); de este modo, se esperaba incluir a quienes por carecer de un capital social mínimo no estuvieran registrados en el sistema. De manera similar, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para facilitar la vacunación en asentamientos y barrios populares, instaló postas fijas y móviles para cumplir este objetivo.

En ambos distritos, los instrumentos elegidos evidenciaron limitaciones. Las autoridades se vieron obligadas a flexibilizar y ampliar los procedimientos dispuestos originalmente para la campaña de vacunación contra el covid-19, para incluir a quienes habían quedado rezagados en la inoculación no por una decisión personal, sino por las diversas dificultades que supuso sortear los procedimientos en línea, fundamentalmente los sectores más vulnerables y rezagados tecnológicos.

Este trabajo aspiró a iniciar un camino exploratorio en la reflexión respecto al empleo de las nuevas tecnologías como una política estatal para agilizar los vínculos con la ciudadanía. La experiencia de los casos presentados deja interrogantes que se irán dilucidando en la medida que la política pública y las ciencias sociales logren apropiarse de un recurso que, aunque externo y perfectible, es una herramienta efectiva tanto a la hora de diseñar políticas inclusivas como de generar conocimiento científico. Sin embargo, en sociedades como la argentina, el debate debe partir del reconocimiento de las asimetrías, tanto en el acceso a la tecnología como en el capital social que cada actor dispone.

Propuestas descentralizadoras —mediante el traspaso de recursos económicos, tecnológicos y personal científico— empoderarían a los gobiernos locales. Su cercanía a la población objeto y su conocimiento del territorio y del capital social colectivo de cada comunidad permitirían elaborar un diagnóstico más preciso y diseñar respuestas más certeras a los problemas más acuciantes; constituyen además un camino plausible para contrarrestar los efectos de la desafiliación social. Esta opción, a mediano plazo, puede transformarse en una vía que además de 'construir' ciudadanía, promueva la inclusión, y vuelva menos acuciante la búsqueda de nuevos paradigmas para abordar la cambiante realidad

social.

Referencias bibliográficas

- Ansede, M. (2021, 02 de febrero). La vacuna rusa Sputnik V alcanza una eficacia del 92%, según un ensayo con 20.000 participantes. *El País*. <https://elpais.com/ciencia/2021-02-02/la-vacuna-rusa-sputnik-v-alcanza-una-eficacia-del-92-segun-un-ensayo-con-20000-participantes.html>
- Argentina difunde lista de beneficiados por escándalo de "vacunas VIP". (2021, 23 de febrero). *France 24*. <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210223-argentina-difunde-lista-de-beneficiados-por-esc%C3%A1ndalo-de-vacunas-vip>
- Bourdieu, P. (2014). *Las estrategias de reproducción social*. Siglo XXI editores.
- Castel, R. (1997). *La metamorfosis de la cuestión social*. Paidós.
- Decreto 297/2020 Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. (2020, 19 de marzo). Presidencia de la Nación. Boletín Oficial N.º 34.334 de 20 de marzo de 2020. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320>
- El presidente y el ministro de Salud recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 (2021, 21 de enero). <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-y-el-ministro-de-salud-recibieron-la-primera-dosis-de-la-vacuna-contra-el>
- Emergencia sanitaria. (s.f.). Vacunatorios de la campaña COVID-19 <https://acortar.link/RGq1PE>
- Ferreño, L. y Giménez, M. (2021). Nuevas tecnologías e inclusión social. *Revista Diversidad de las Culturas*, 1 (1), 156-180. https://diversidadcultural.unju.edu.ar/sistema/art_originales/NUEVAS%20TECNOLOG%3%8DAS...pdf
- Fontdevila, M. (2022, 3 de agosto). Atención al público. *ElDiario.es*. https://www.eldiario.es/opinion/atencion-publico_131_9221806.html
- Galicia citará a los mayores de 80 años desde el lunes para la dosis de refuerzo contra el COVID-19 (2021, 20 de octubre). *El Faro de Vigo*. <https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/10/20/galicia-citara-mayores-80-anos-58586629.html>
- Geertz, C. (2008). Géneros confusos. La reconfiguración del pensamiento social. C. Reynoso (Comp.). *El surgimiento de la antropología posmoderna* (pp. 63-77). Gedisa editorial.
- González, E. (2021, 2 de junio). La gestión de las vacunas se convierte en el flanco más débil del Gobierno argentino. *El País*. <https://elpais.com/sociedad/2021-06-02/la-gestion-de-las-vacunas-se-convierte-en-el-flanco-mas-debil-del-gobierno-argentino.html>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (s.f.). Pobreza. <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46>
- Los detalles del ensayo clínico de la vacuna contra COVID-19 que lidera el científico Fernando Polack en el Hospital Militar (2020, 7 de agosto). *Infobae*.

<https://acortar.link/P6iqrY>

Merklen, D. (2000). Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. En M. Svampa (Edit.). *Desde abajo* (pp.81-109). Biblos & Universidad Nacional Sarmiento.

Ministerio de Salud. (s.f.). *Calendario Nacional de Vacunación*. Gobierno de Argentina. <https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas>

Nuevas intrigas del vacunatorio VIP: delivery, combis repletas de jóvenes y la trampa del personal estratégico (2021, 23 de febrero). *TN*. <https://tn.com.ar/politica/2021/02/23/nuevas-intrigas-del-vacunatorio-vip-delivery-combis-con-gente-joven-y-la-argucia-del-personal-estrategico/>

Oszlak, O. (2020a). *El Estado en la era exponencial*. Instituto Nacional de la Administración Pública - INAP. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_estado_en_la_era_exponencial_-_oscar_oszlak_0.pdf

Oszlak, O. (2020b). Los impactos de la 'era exponencial' sobre la gestión pública en los países emergentes. *Revista del CLAD Reforma y Democracia* (76), 5-38. <https://clad.org/wp-content/uploads/2021/01/076-01-OOszlak.pdf>

Palacio, P. (2020). La economía argentina en 2020: entre la crisis del Covid-19 y las restricciones estructurales del desarrollo periférico. *Latitud Sur*, 15, 31-47. <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/LATSUR/article/view/1994/2740>

Plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina (2020, 23 de diciembre). <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/coronavirus-vacuna-plan-estrategico-vacunacion-covid-19-diciembre-2020.pdf>

Plan provincial público, gratuito y optativo contra COVID-1 Buenos Aires Vacunate. (s.f.). Gobierno de la provincia de Buenos Aires. <https://vacunatepba.gba.gob.ar/>

¿Qué es AMBA? (s.f.). Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. <https://acortar.link/TIFxJe>

Quetglas, F. (2021a, 11 de junio). Necesitamos un pacto ético. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/opinion/necesitamos-un-pacto-etico-nid11062021/>

Quetglas, F. (2021b, 5 de julio). Pobreza: de la sensibilidad a la responsabilidad. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/opinion/pobreza-de-la-sensibilidad-a-la-responsabilidad-nid05072021/>

Rivas, P. (2021) Crisis de civilización. Pandemia y reproducción sistémica. *Revista de Administración Pública del GLAP RAP-GLAP*, 5(8), 65-80. <https://lagpa.iias-iasa.org/Revista%20RAP-GLAP%20V5N8.pdf>

Rivas, P. (2022). Los dilemas democráticos de la inteligencia artificial. En X. Barragán (Coord.). *Gobernanza y Administración pública inteligente* (1.^a edición) (pp.141-59). Editorial IAEN.

Schraer, R. (2021, 2 de febrero). Sputnik V: la vacuna rusa contra el coronavirus muestra en un estudio de "The Lancet" una eficacia de 92%. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-55902348>

Simmel, G. (2005). La metrópolis y la vida mental. *Bifurcaciones. Revista de Estudios Culturales y Urbanos*, 4, 1-10. http://www.bifurcaciones.cl/004/bifurcaciones_004_reserva.pdf

Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales [SIEMPRO]. (s.f.). Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación Argentina. <https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/siempro>

Sputnik V. (s.f.). *Sobre Sputnik V*. <https://sputnikvaccine.com/esp/about-vaccine/>

Struminger, B. (2021, 28 de febrero). Vacunación VIP: denuncias de la oposición y causas judiciales ponen en jaque a gobernadores e intendentes. *Infobae*. <https://www.infobae.com/politica/2021/02/28/vacunacion-vip-denuncias-de-la-oposicion-y-causas-judiciales-ponen-en-jaque-a-gobernadores-e-intendentes/>

The Lancet publicó resultados de la Sputnik V y confirmó la eficacia de 91,6% (2021, 2 de febrero). *Télam*. <https://www.telam.com.ar/notas/202102/543298-sputnik-publico-resultados-en-the-lancet-y-confirmo-eficacia-la-del-916.html>

Vacunación Covid-19. (s.f.). Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. <https://buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19>

Vacunas contra el coronavirus: colapsó el sitio de la Ciudad para inscribirse (2021, 19 de febrero). *Clarín*. https://www.clarin.com/sociedad/vacunas-coronavirus-colapso-sitio-ciudad-inscribirse_0_WhAqQMfZa.html

Para citar este artículo	Ferreño-L. y Giménez -M. , (2023). Covid-19: políticas públicas y desigualdad social. Desafíos de las nuevas tecnologías durante las campañas de vacunación. <i>Teuken Bidikay</i> , 14(22). Doi 10.33571/teuken.v14n22a2
--------------------------	--

GE*: HAS